



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.

Excma. Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires:

Julio M. Conte-Grand, Procurador General
ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires (cfr. arts. 189, Const. de la Provincia de
Buenos Aires; y 1, 9 y ccs., ley 14.442), me presento
ante VV.EE. en la causa P. 139.222-RC caratulada "*G.,
J. J. s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley en causa n° 121.782 del Tribunal de Casación
Penal, Sala IV*" y respetuosamente digo:

I. OBJETO.

Que en tiempo y forma, de acuerdo con lo
normado en los arts. 256 y 257 del Cód. Procesal Civil y
Comercial de la Nación, contando con plena legitimación
al efecto (cfr. art. 21, ley 14.442), vengo a interponer
recurso extraordinario federal en los términos del art.
14 de la ley 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación contra la sentencia dictada por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con
fecha 3 de junio de 2024 en la causa de referencia.

II. ADMISIBILIDAD. Gravedad

Institucional. Arbitrariedad.

El pronunciamiento que impugno mediante el presente recurso extraordinario federal fue dictado por esa Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como superior tribunal de la causa y reviste la calidad de sentencia equiparable a definitiva en tanto provoca un agravio de imposible reparación ulterior, toda vez que al hacer lugar arbitrariamente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formulado por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, revocó la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta a J. J. G. y su correspondiente cómputo.

La lesión de magnitud generada con el fallo de la Corte local y que de seguido desarrollaré, impone el conocimiento de esa Corte federal, pues no podrá ser nuevamente planteada ni los agravios disiparse con posterioridad, lo que clausuraría toda posibilidad de acceso a la justicia afectando la garantía del debido proceso legal que también ampara al Ministerio Público Fiscal (cfr. doct. CSJN Fallos: 199:617; 237:158; 299:17; 308:1557).

A su vez, el pronunciamiento que impugno



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

enerva una gravedad institucional manifiesta que impone su necesaria y pronta reparación.

Nótese, pues, la relevancia de esta situación trascendental sobradamente configurada en el *sub lite*: la gravedad institucional que se denuncia y que es fruto de un serio y concreto razonamiento con suficiente aptitud para demostrar indudablemente su ocurrencia (cfr. doctr. SCBA causa P. 132.709, sent. de 18-VIII-2021; e.o.; y CSJN Fallos: 303:221), permite relativizar los requisitos generales de admisibilidad de los carriles impugnativos y que, aún en los supuestos de recurribilidad de sentencias no definitivas y/o equiparables a definitivas (que, como se vio, no es el caso de autos que cuenta con tal esencial cualidad), el órgano del recurso deba aperturar su competencia y abocarse al conocimiento de la cuestión planteada (cfr. Martinez Astorino R. D. - Castro, M. - Mahiques C. A. - Grassi A. P., *Proceso y Procedimientos Penales de la provincia de Buenos Aires*, Coordinadores Bertolino, Pedro J. Y Silvestrini, Alberto J., Ed. Abeledo Perrot, pág. 692).

III. ANTECEDENTES.

El Juzgado de Responsabilidad Penal

Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de San Martín condenó a G. por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva, tentativa de robo con arma de fuego apta y homicidio *criminis* causa, homicidio *criminis* causa en grado de tentativa y robo con arma de fuego (hechos 1 y 2) y robo calificado por el uso de arma apta en concurso real con resistencia a la autoridad (hecho 3), todos ellos en concurso real entre sí, imponiéndole la sanción de quince (15) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas. Asimismo, dispuso no comunicar esa decisión al Registro Nacional de Reincidencia.

Dicha decisión fue confirmada en fecha 25 de octubre de 2022 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo Departamento Judicial, recurso de apelación -formulado por el Ministerio Público Fiscal- mediante.

El 2 de marzo de 2023, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la especialidad articulado por el representante de la acción pública, doctor Marcelo Javier Tonelli. Consecuentemente, casó la resolución impugnada y comunicó lo resuelto al



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

juzgado de origen, a efectos de que libre oficio al Registro Nacional de Reincidencia a fin de ponerlo en conocimiento de la condena impuesta a G. y su correspondiente cómputo, aditiéndose la prohibición de ser informado ello a particulares, limitándose el suministro de esta información a las autoridades judiciales y/o policiales que la requieran.

Ante ello, la defensa oficial de G. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por el órgano casatorio y concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que, al resolver en fecha 3 de junio de 2024, revocó la decisión recurrida.

Es entonces contra esta última decisión que interpongo el presente recurso extraordinario federal.

IV. CUESTIÓN FEDERAL. PLANTEO OPORTUNO.

La cuestión federal que agravia a esta parte tuvo su génesis en el pronunciamiento que por este carril impugno pues con anterioridad a ello -en sede casatoria-, este Ministerio Público Fiscal había visto satisfechas sus pretensiones. Es decir, el agravio de entidad federal nació precisamente con el dictado de la sentencia del 3 de junio de 2024 de la Suprema Corte de

Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En efecto, si bien al interponer el recurso de casación se articularon planteos vinculados con la arbitrariedad y la gravedad institucional -aunque por diversos motivos- en función de la respuesta brindada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, lo cierto es que en dicha ocasión el Tribunal casatorio adoptó su resolución acogiendo a los agravios del Ministerio Público Fiscal.

Así las cosas, la primera oportunidad de planteamiento es precisamente la de esta presentación extraordinaria (arts. 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; y 3 -inc. "a"-, Ac. 4/2007).

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO FEDERAL.

Como adelanté, la Suprema Corte local acogió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formulado por la defensa de G. y revocó la decisión del Tribunal de Casación Penal que ordenó comunicar al Registro Nacional de Reincidencia la condena impuesta al nombrado y su correspondiente cómputo.

Para decidir en esa dirección, sostuvo la doctora Kogan que la casación se apartó de la doctrina legal de la Suprema Corte provincial que resulta de



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

aplicación al caso.

En tal sentido, afirmó que en el precedente P. 114.313 (resol. de 30-III-2016) -dictado a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "R., B. S. y otros s/Incidente tutelar" (CSJ 551/2012 48-R/CS1, sent. de 22-XII-2015)-, ese Máximo Tribunal local revocó la decisión que había confirmado la comunicación de la resolución por la que no se aplicó sanción a los menores al Registro Nacional de Reincidencia. Y que dicho criterio también fue adoptado en las causas P. 114.153 (resol. de 4-V-2016), P. 114.155 (resol. de 15-VI-2016), P. 115.571 (resol. de 17-VIII-2016), P. 114.583 (resol. de 5-X-2016), P. 115.303 (resol. de 8-III-2017), entre otras.

Por otro lado, consideró que la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de aplicar la norma del art. 58 del Cód. Penal no guardaba ninguna relación con la temática discutida en el caso, la que se circunscribió a la comunicabilidad al Registro Nacional de Reincidencia de una condena y cómputo decidida en el marco del fuero especial de menores.

Finalmente, recordó que para causas como la de autos se encontraba previsto el Registro de Procesos del Niño (art. 51, ley 13.634 y SCBA, resol.

3.889/08).

A partir de ello, revocó la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por entender que no resultaba pertinente la comunicación de información surgida de la tramitación de un proceso del fuero de especialidad al Registro Nacional de Reincidencia.

i. Gravedad institucional. Principio de unidad de pena.

En primer lugar, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la gravedad institucional se encuentra intrínsecamente relacionada -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, que va mas allá de la mera preocupación de los litigantes y atañe a la comunidad en su conjunto (cfr. doctr. CSJN Fallos: 324:533; e.o.).

En el mismo sentido, indicó que se configura un supuesto de gravedad institucional cuando lo resuelto trasciende el mero interés particular para comprometer la buena marcha de las instituciones constitucionales (cfr. doctr. CSJN Fallos: 300:417; 311:2319; 324:833, 1225; e.o.).



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

De forma semejante, expresó que la gravedad institucional se patentiza cuando la solución alcanzada presenta deficiencias que son susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia (cfr. doctr. CSJN Fallos: 257:132).

Con esta introducción, debo decir que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia provincial constituye -efectivamente- un caso de gravedad institucional; ello, por cuanto su modo de decidir pone en jaque la buena administración de justicia y las instituciones básicas del sistema republicano, avanzando sobre cuestiones atinentes al Poder Legislativo. Me explico.

Tal como manifesté en el dictamen realizado a raíz del recurso extraordinario articulado por la defensa de G., no resulta posible deslindar el análisis de la necesidad de comunicar las condenas al Registro Nacional de Reincidencia y la posibilidad de unificar penas, condenas y sentencias que prevé el art. 58 del Cód. Penal, tal como pretende hacer la Suprema Corte provincial en la sentencia recurrida.

Conforme tiene dicho la Corte federal, la norma citada responde al **propósito de establecer en**

forma real y efectiva la unidad penal en el territorio de la Nación, adoptando las medidas pertinentes para que ella no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones (cfr. doctr. CSJN Fallos: 212:403; 311:744; 311:1168; 329:4339; 330:1186; 340:829; e.o.).

Doctrinalmente, se entiende que "[...] de este precepto se colige el principio de la "pena total": la regla es que no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente. Lo que se busca es evitar que un condenado múltiple en épocas sucesivas o jurisdicciones distintas quede sometido a un régimen punitivo plural a diferencia de quien fue juzgado por un único tribunal" (Ricardo Basílico, L. Villada Jorge. Código Penal, 4^a ed. [En Línea]. Argentina: Hammurabi, 2024 [consultado 7 Jun 2024]. Disponible en: <https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-penal-4a-ed?location=220>).

Es decir que, teniendo en cuenta este principio de unidad de pena, "[...] nuestro Código Penal no prevé la posibilidad de subsistencia de más de una pena pendiente de cumplimiento respecto de una misma persona, siempre que ello suceda, por cualquier causa que



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

fuere, será necesario unificar las penas mediante el dictado de una nueva sentencia" (R. Zaffaroni Eugenio. Código Penal, t. 2 [En Línea]. Argentina: Hammurabi, 2019 [consultado 7 Jun 2024]. Disponible en: <https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-penal-t-2?location=693>).

En consecuencia aquí radica el núcleo del asunto toda vez que, al resolver de la forma en la que lo hizo, la Suprema Corte provincial obtura toda posibilidad de, eventualmente, cumplir con el principio de la pena única y de practicar las unificaciones previstas en el art. 58 del digesto sustantivo, los que únicamente pueden garantizarse si la condena y el cómputo de pena dispuestos en el fuero minoril se comunican al Registro Nacional de Reincidencia.

Lo dicho no constituye una mera discrepancia respecto de la sentencia que aquí se recurre -en tanto refiere que la temática discutida en autos se circunscribe a la comunicabilidad al Registro Nacional de Reincidencia y no se vincula con la norma del art. 58 del Cód. Penal-, toda vez que, según entiendo, el Máximo Tribunal provincial omite realizar un análisis conglobado de la cuestión, sin tomar en consideración que lo así

resuelto indefectiblemente va a redundar en la violación al principio de la pena total.

En efecto, no es posible atender a ese principio de pena única si no se cuenta -en caso de que deban unificarse condenas, penas o sentencias (art. 58 del Cód. Penal)- con la información necesaria para garantizar su cumplimiento, y para ello cumplen un rol trascendental los informes del Registro Nacional de Reincidencia.

Es que si bien en la provincia de Buenos Aires existe un registro específico denominado Registro de Procesos del Niño -que se halla bajo la órbita de esta Procuración-, el mismo no registra antecedentes penales, sino procesos en trámite y su finalidad es la acumulación de procesos y el control de su continuidad por parte de los magistrados del fuero de responsabilidad penal juvenil (art. 51, ley 13.634; y Resol. SCBA 835/08, 3.221/08 y 3.889/08).

Asimismo, dicho registro funciona únicamente en el ámbito provincial siendo que cualquier informe que le sea requerido por parte de una organización ajena al Poder Judicial de la provincia debe ser elevado a la Suprema Corte de Justicia la que, previo dictamen de esta Procuración General, deberá resolver lo



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

que corresponda sobre el pedido en cuestión (art. 10°, Resol. SCBA 3.889/08); mientras que el Registro Nacional de Reincidencia tiene la misión de centralizar la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción del país.

Así, la única manera posible de unificar condenas, penas o sentencias en caso de que el imputado contara con una sentencia recaída en el fuero de responsabilidad penal juvenil -cualquiera sea la jurisdicción-, sería que su defensor la solicite e informe los concretos antecedentes. En caso contrario, la jurisdicción no contaría con esa información, vulnerando -reitero- la prohibición de cumplir penas en dos o más causas de manera simultánea.

De sostenerse el criterio impugnado, lo decidido tendrá necesariamente trascendencia social futura, impactando en un sin número de casos similares y convalidando la vulneración al principio de pena única el que, en la práctica, perdería vigencia en las múltiples causas de trámite ante el fuero de responsabilidad penal juvenil, debido a la concreta imposibilidad de llevar adelante las unificaciones del art. 58 del Cód. Penal, por no contarse con un debido registro de condenas y cómputos de penas.

Lo que se postula de esta parte, es el análisis sistemático de las normas contenidas en el código sustantivo. Ello, sin vulnerar ningún compromiso internacional asumido, toda vez que la información disponible en el Registro Nacional de Reincidencia respecto de aquellas personas condenadas en el fuero de responsabilidad penal juvenil únicamente debe estar disponible para las autoridades judiciales en un proceso penal, con el objetivo de fijar una pena única total.

ii. Arbitrariedad por autocontradicción.

En múltiples pronunciamientos la Corte local estableció que resulta compatible la unificación que contempla el art. 58 del Cód. Penal entre los fueros de mayores y el régimen penal juvenil, sin que ello genere contradicciones con los lineamientos específicos que rigen el fuero especial, ni choque con las garantías que lo sustentan (cfr. doctr. SCBA causa P. 136.796, sent. de 22-VIII-2023; P. 133.129, sent. de 27-IV-2022; P. 134.971, sent. de 4-IV-2022; e.o.).

Resulta, entonces, autocontradictorio, que se avale la posibilidad de unificar condenas y penas entre fueros y que, simultáneamente, se vede a la jurisdicción la posibilidad de acceder a la concreta



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

información que permita cumplir con la unificación y de este modo arribar a la pena única.

Para más, en aquellos casos en que la defensa lleve a conocimiento del sentenciante cualquier condena previa recaída en el fuero minoril, la sentencia condenatoria que fije la pena única sí deberá ser comunicada al Registro Nacional de Reincidencia (art. 2 ap. "i", ley 22.117).

Finalmente, cabe mencionar que la doctrina sentada por la Corte federal en el precedente "R., B. S. y otros s/Incidente tutelar", no resulta de aplicación al al caso *sub examine*, toda vez que dicho expediente versaba sobre la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia sobre el dictado de un auto de responsabilidad, pero en puridad no se había aplicado una sanción; mientras que aquí se apunta a la necesidad de informar la concreta condena y cómputo de pena, a fin de garantizar eventuales unificaciones.

La misma crítica cabe hacer de los precedentes referidos en el pronunciamiento atacado, observándose que en las causas P. 114.313, P. 114.153 y P. 114.155, se resolvió no aplicar sanción penal; en la causa P. 115.571, se dispuso mantener el tratamiento

tutelar por un año; y en las causas P. 114.583 y 115.303, únicamente se dictó auto de responsabilidad.

Por lo tanto, reitero, estamos hablando de situaciones por demás disimiles, desde que en ninguno de los expedientes referidos se estableció un concreto cómputo de pena como sucedió en autos.

Para más, considero que los nuevos argumentos dados en el presente recurso, justifican que se reanalice la doctrina legal de la Corte en la materia en casos como el que nos ocupa, en el que el principio de la pena total se vería afectado por no poder accederse a los antecedentes en causas del fuero de responsabilidad penal juvenil.

En razón de lo hasta aquí expuesto, considero que el pronunciamiento atacado resulta ser arbitrario y de gravedad institucional, por lo que merece la intervención del Máximo Tribunal federal en virtud de la vía prevista en los arts. 14 y 15 de la ley 48, conforme la asentada doctrina en la materia (cfr. CSJN, "Strada" Fallos: 308:490; "Di Mascio" D.309.XXI., sent. de 1-XII-1988, Fallos: 311: 2478; y "Christou" C.1091.XX., sent. de 19-II-1987, Fallos: 310:324).

Consecuentemente, solicito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto la



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

sentencia dictada por la Suprema Corte provincial, mandando a dictar -o dictando- un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

VI. EXISTENCIA DE RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA ENTRE LAS NORMAS FEDERALES INVOCADAS Y LO RESUELTO.

La relación directa e inmediata entre las infracciones alegadas, lo debatido y lo resuelto en el caso, se observa notoriamente, pues se dictó una sentencia que, merced a la manifiesta autocontradicción y a la gravedad institucional implicada, revocó el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal, comprometiendo así el debido proceso legal (cfr. Fallos 322:1945, consid. 4° *in fine*).

En suma, los planteos aquí formulados revisten evidente carácter federal por la existencia de manifiesta arbitrariedad y gravedad institucional que afectan a la sentencia atacada, conforme el alcance que le asignó la Corte Federal (cfr. CSJN Fallos: 295:606; 301:108; 306:1242; 310:927; 311:2548; 323:192; 324:547; e.o.).

La cuestión federal -sustentada en la gravedad institucional y arbitrariedad- se vincula



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

P-139222-2

explicitados en esta presentación, dejando sin efecto la resolución de la Suprema Corte provincial, dictando o mandando dictar una nueva conforme a derecho (art. 16, ley 48).

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.